

No. 29057

**SPAIN
and
BOLIVIA**

Agreement on reciprocal promotion and protection of investments. Signed at Buenos Aires on 24 April 1990

Authentic text: Spanish.

Registered by Spain on 29 July 1992.

**ESPAGNE
et
BOLIVIE**

Accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements. Signé à Buenos Aires le 24 avril 1990

Texte authentique : espagnol.

Enregistré par l'Espagne le 29 juillet 1992.

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE BOLIVIA SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECIPROCA DE INVERSIONES

EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE BOLIVIA

-Deseosos de reforzar la cooperación económica entre los dos Estados,

- reconociendo el importante papel de las inversiones de capitales privados extranjeros en el proceso de desarrollo económico y el derecho de cada Parte Contratante de determinar este papel y de definir las condiciones en las cuales las inversiones extranjeras podrían participar en este proceso,

- reconociendo que la única manera de establecer y mantener un flujo internacional adecuado de capitales es mantener mutuamente un clima de inversiones satisfactorio y, por lo que respecta a las inversiones extranjeras, respetar la soberanía y las leyes del país receptor que tenga jurisdicción sobre ellas, actuar de forma compatible con las políticas y las prioridades adoptadas por el país receptor y esforzarse por contribuir a su desarrollo.

- deseosos de crear condiciones favorables para la inversión de capitales en los dos Estados y de intensificar la cooperación entre inversores de los dos Estados, especialmente en el ámbito de la tecnología, la industrialización y la productividad.

- reconociendo la necesidad de proteger las inversiones de los inversores de ambos Estados y estimular la transferencia de capitales con vistas a promover la prosperidad económica de ambos Estados,

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO 1

DEFINICIONES

A los fines del presente Acuerdo, los inversores son:

a) Por lo que respecta al Reino de España, las personas físicas residentes en España y las personas jurídicas con domicilio social en España y constituidas de acuerdo con las leyes españolas.

b) Por lo que respecta a la República de Bolivia, toda persona física con nacionalidad boliviana en virtud de la legislación en vigor en la República de Bolivia, así como toda persona moral o sociedad de personas y otra asociación o entidad cuyo estatuto provenga de dicha legislación.

El término "inversiones" engloba la adquisición de toda categoría de bienes y haberes y en particular, pero no exclusivamente:

- a) La propiedad de bienes muebles e inmuebles así como cualquier otro derecho real como hipotecas, derechos de prenda, usufructos y derechos similares.
- b) Acciones y otras formas de participación en sociedades,
- c) Activos monetarios y derechos a toda prestación con valor económico, especialmente los valores públicos y privados de renta fija así como todas las categorías de préstamos comerciales y financieros capitalizados o no.
- d) Derechos de autor, derechos de propiedad industrial (tales como patentes, marcas o nombres comerciales).
- e) Concesiones u otros derechos otorgados por las autoridades de las Partes Contratantes, incluidas las concesiones de investigación, extracción o explotación de recursos-naturales.

El término "rentas" significa los montantes de los beneficios netos o intereses vinculados a una inversión durante un período determinado.

ARTICULO 2

FOMENTO, ADMISSION

Cada Parte Contratante fomentará, en la medida de lo posible, las inversiones efectuadas en su territorio por inversores de la otra Parte Contratante y admitirá estas inversiones, conforme a sus leyes, disposiciones y reglamentos.

El presente Convenio se aplicará también a las inversiones de capital efectuadas antes de la entrada en vigor del mismo por los nacionales o sociedades de una Parte Contratante conforme a las disposiciones legales de la otra Parte Contratante en el territorio de esta última.

ARTICULO 3PROTECCION

Cada Parte contratante protegerá en su territorio las inversiones efectuadas, conforme a su legislación, por inversores de la otra Parte Contratante y, no obstaculizará, mediante medidas injustificadas o discriminatorias la gestación, el mantenimiento y la utilización, el disfrute, la extensión, la venta y, en su caso, la liquidación de tales inversiones.

Cada Parte contratante se esforzará por conceder las autorizaciones necesarias en relación con estas inversiones y permitirá, en el marco de su legislación, la ejecución de contratos de licencia, asistencia técnica, comercial o administrativa.

Cada Parte contratante se esforzará igualmente, cada vez que sea necesario, en dar las autorizaciones requeridas en relación con las actividades de consultores o expertos contratados por inversores de la otra Parte Contratante.

ARTICULO 4TRATAMIENTO

1) Cada Parte Contratante asegurará, en su territorio, un tratamiento justo y equitativo a las inversiones de los inversores de la otra Parte Contratante.

2) Este tratamiento no será menos favorable que el otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones efectuadas en su territorio por su propios inversores o que el otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones efectuadas en su territorio por los inversores de la nación más favorecida, si este último tratamiento es el más favorable.

3) No obstante, este tratamiento no se aplicará a los privilegios que una Parte Contratante otorgue a los inversores de un tercer Estado en virtud de su participación o de su asociación en una unión aduanera, un mercado común o una zona de libre cambio.

4) Los inversores de una Parte Contratante no podrán prevalecerse del tratamiento previsto en el apartado 2 del presente Artículo para beneficiarse de medidas de carácter incitativo (facilidades de créditos, donaciones, primas de equipamiento, garantías o seguros) acordadas por el Gobierno de la otra Parte a sus propios nacionales en materia de política de desarrollo nacional.

ARTICULO 5TRANSFERENCIA

Cada una de las Partes Contratantes, en cuyo territorio han efectuado inversiones inversores de la otra Parte Contratante, admitirá a estos inversores sin retraso injustificado la transferencia en divisas convertibles de los pagos correspondientes a sus inversiones y en particular:

- a) Intereses, dividendos, beneficios y otras rentas corrientes.
- b) Cánones y otros pagos derivados de contratos relativos a los derechos de licencia y de la asistencia comercial, administrativa y técnica.
- c) Pagos derivados de otros contratos, incluídos los pagos de amortizaciones o devoluciones de préstamos financieros o comerciales.
- d) Productos de la venta o de la liquidación parcial o total de una inversión, incluidas las eventuales plusvalías.
- e) Indemnizaciones abonadas por motivo de expropiación, de nacionalización o de medidas que tengan el mismo efecto o el mismo carácter.

Las transferencias arriba indicadas se entienden exentas de impuestos y se realizarán en divisas convertibles. La concesión de las autorizaciones administrativas necesarias para la transferencia deberá efectuarse en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la presentación en buena y debida forma de la solicitud de transferencia.

ARTICULO 6NACIONALIZACION /EXPROPIACION

Las medidas de nacionalización, de expropiación, o toda otra medida con el mismo carácter, que pudieran ser tomadas por las autoridades de una de las Partes Contratantes en contra de las inversiones pertenecientes a inversores de la otra Parte Contratante, deberán ser conformes a las prescripciones legales y no deberán ser ni discriminatorias, ni motivadas por razones diferentes de la utilidad pública. La Parte Contratante que haya tomado tales medidas abonará al interesado, sin retraso injustificado, una indemnización adecuada y efectiva.

ARTICULO 7CONDICIONES MAS FAVORABLES

Las condiciones más favorables que las del presente Acuerdo que han sido convenidas por una de las Partes Contratantes con los inversores de la otra Parte Contratante no se verán afectadas por el presente Acuerdo.

ARTICULO 8PRINCIPIO DE SUBROGACION

En el caso en que una de las Partes Contratantes efectúe un pago a un inversor en virtud de una garantía otorgada contra riesgos no comerciales respecto a una inversión realizada en el territorio de la otra parte Contratante, ésta última reconocerá la subrogación de la primera Parte Contratante en los derechos económicos del inversor indemnizado.

En lo que concierne a los derechos reales ligados a la inversión (derecho de propiedad, uso, usufructo), la subrogación sólo puede producirse tras la autorización por parte de las autoridades competentes, de acuerdo con las leyes y reglamentos de la Parte Contratante en la que ha sido realizada la inversión.

ARTICULO 9ARBITRAJE

1) Las diferencias relativas a la interpretación o a la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo serán solucionadas por la vía diplomática.

2) Si las dos Partes Contratantes no llegan a un arreglo en un plazo de nueve meses; la diferencia será sometida, a petición de una u otra Parte Contratante, a un tribunal arbitral compuesto por tres miembros. Cada Parte Contratante designará un árbitro. Los árbitros así designados nombrarán un presidente que deberá ser nacional de un tercer Estado.

3) Si una de las Partes Contratantes no ha designado su árbitro y si, tras invitación de la otra Parte para designarlo, no lo ha hecho en el plazo de dos meses, el árbitro será nombrado, a petición de esta última Parte Contratante por el Presidente del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.

4) Si los dos árbitros no pueden ponerse de acuerdo sobre la elección del Presidente durante los dos meses siguientes a su designación, éste último será nombrado, a petición de una u otra Parte Contratante, por el Presidente del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.

5) Si, en los casos previstos en los párrafos 3 y 4 del presente artículo, el presidente del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya no ejerce su mandato o si es nacional de unas de una de las Partes Contratantes, las nominaciones serán hechas por el vicepresidente y, si este último no ejerce su mandato o es nacional de una de las Partes Contratantes, serán hechas por el miembro más antiguo del Tribunal que no sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes.

6) A menos que las Partes Contratantes dispongan de otro modo, el tribunal fija él mismo su procedimiento.

7) Las decisiones del tribunal son definitivas y obligatorias para las Partes contratante

ARTICULO 10

ENTRADA EN VIGOR, PRORROGA, DENUNCIA

1) El presente Acuerdo entrará en vigor el día en que los dos Gobiernos se hayan notificado mutuamente que las respectivas formalidades constitucionales requeridas para la entrada en vigor de acuerdos internacionales han sido cumplimentadas. Permanecerá en vigor por un período inicial de diez años y, por tácita reconducción, por períodos consecutivos de dos años.

Cada Parte Contratante podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación previa por escrito, seis meses antes de la fecha de su expiración.

2) En caso de denuncia, las disposiciones previstas en los artículos 1 al 2 arriba citados seguirán aplicándose durante un período de diez años a las inversiones efectuadas antes de la denuncia.

Hecho en dos originales en lengua española, que hacen igualmente fe, en Madrid a 24 de Abril de 1990.

Por el Reino
de España:

[*Signed — Signé*]

LUIS YÁÑEZ-BARNUEVO
Secretario de Estado
para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérica

Por la República
de Bolivia:

[*Signed — Signé*]

CARLOS ITURRALDE
Ministro de Relaciones Exteriores
y Culto

[TRANSLATION — TRADUCTION]

AGREEMENT¹ BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE REPUBLIC OF BOLIVIA ON RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Kingdom of Spain and the Republic of Bolivia,

Desiring to strengthen economic cooperation between the two States,

Recognizing the important role played by private foreign capital investments in the economic development process, and the right of each Contracting Party to determine that role and to define the conditions under which foreign investments may participate in the process,

Recognizing that the only way to establish and maintain a sufficient international flow of capital is to sustain a mutually satisfactory investment climate and, with regard to foreign investment, to respect the sovereignty and laws of the host country having jurisdiction thereover, to act in a manner compatible with the policies and priorities adopted by the host country and to endeavour to contribute to its development,

Desiring to establish favourable conditions for capital investments in the two States and to intensify cooperation between investors from the two States, especially in the fields of technology, industrialization and productivity,

Recognizing the need to protect the investments of investors of both States and to stimulate the flow of capital with a view to promoting the economic prosperity of both States,

Have agreed as follows:

*Article 1***DEFINITIONS**

For purposes of this Agreement, investors are:

(a) In respect of the Kingdom of Spain, individuals residing in Spain and artificial persons whose registered offices are in Spain and constituted in conformity with Spanish laws;

(b) In respect of the Republic of Bolivia, any individual of Bolivian nationality by virtue of legislation in force in the Republic of Bolivia and any artificial person, partnership or other association or entity whose statutes derive from that legislation.

The term "investments" shall apply to the acquisition of any category of property and assets, and particularly but not exclusively, to:

(a) Movable and immovable property and all other real rights such as mortgages, sureties, beneficial interests and similar rights;

¹ Came into force on 12 May 1992, the date on which the Parties had notified each other of the completion of the required constitutional procedures, in accordance with article 10 (1).

- (b) Shares and other forms of participation in companies;
- (c) Monetary assets and rights to any benefit having an economic value, especially fixed-income securities, both public and private, and all categories of commercial and financial loans whether capitalized or not;
- (d) Copyrights, industrial property rights (such as patents, trade marks or trade names);
- (e) Concessions or other rights granted by the authorities of the Contracting Parties, including concessions for prospecting, mining or developing natural resources.

The term "income" shall mean the net profits or interests deriving from an investment during a given period.

Article 2

PROMOTION AND PERMISSION

Each Contracting Party shall promote, as far as possible, investments made in its territory by investors of the other Contracting Party and shall permit those investments, in accordance with its laws, provisions and regulations.

This Agreement shall apply also to capital investments made before its entry into force by nationals or companies of one Contracting Party in accordance with the legal provisions of the other Contracting Party in the latter's territory.

Article 3

PROTECTION

Each Contracting Party shall protect within its territory investments made in accordance with its legislation by investors of the other Contracting Party and shall not impair, by unjustified or discriminatory measures, the management, maintenance, use, enjoyment, extension, sale and, should it so happen, liquidation of such investments.

Each Contracting Party shall endeavour to grant the necessary permits in connection with such investments and shall allow, within the framework of its legislation the execution of licensing contracts and of technical, commercial or administrative assistance.

Each Contracting Party shall endeavour also, whenever necessary, to grant the permits required for the activities of consultants or experts engaged by investors of the other Contracting Party.

Article 4

TREATMENT

1. Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment within its territory for the investments of investors of the other Contracting Party.
2. This treatment shall be no less favourable than that granted by each Contracting Party in respect of the investments made within its territory by its own

investors or than that granted by each Contracting Party in respect of investments made within its territory by investors of the most-favoured nation, if the latter treatment is more favourable.

3. Nevertheless, this treatment shall not apply to privileges which either Contracting Party accords to investors of a third State by virtue of its membership in or association with a customs union, common market or free-trade area.

4. The investors of one Contracting Party may not avail themselves of the treatment provided for in paragraph 2 of this article in order to benefit from incentive measures (credit facilities, donations, equipment subsidies, guarantees or insurance) accorded by the Government of the other Party to its own nationals as part of its national development policy.

Article 5

TRANSFERS

Each of the Contracting Parties within whose territory investors of the other Contracting Party have made investments shall permit those investors to transfer, without undue delay, in convertible currency, payments from their investments, in particular:

- (a) Interest, dividends, profits and other current income;
- (b) Royalties and other payments deriving from licensing rights and from commercial, administrative or technical assistance;
- (c) Payments deriving from other contracts, including payments for amortization or repayment of financial or commercial loans;
- (d) Proceeds from the sale or partial or total liquidation of an investment, including capital appreciation, if any;
- (e) Compensation for expropriation, nationalization or measures having the same effect or character.

The aforementioned transfers shall be understood to be tax-exempt and shall be made in convertible currency. The administrative authorizations necessary for the transfer shall be granted within three months from the date of the submission in good and due form of the transfer request.

Article 6

NATIONALIZATION/EXPROPRIATION

Any measure of nationalization, expropriation or any other measure of the same nature taken by the authorities of one of the Contracting Parties against investments belonging to investors of the other Contracting Party must be in accordance with the law and must not be discriminatory or prompted by any consideration other than public use. The Contracting Party having taken such measures shall pay, without undue delay, adequate and effective compensation to the person entitled thereto.

*Article 7***MORE FAVOURABLE CONDITIONS**

Where one of the Contracting Parties has agreed with investors of the other Contracting Party to conditions more favourable than those of this Agreement, those conditions shall not be affected by this Agreement.

*Article 8***PRINCIPLE OF SUBROGATION**

Where one Contracting Party makes a payment to an investor by virtue of a guarantee issued against non-commercial risks in respect of an investment in the territory of the other Contracting Party, the latter shall recognize the subrogation of the first Contracting Party in respect of the economic rights of the investor who has been compensated.

With regard to the real rights related to the investment (right of ownership, use, beneficial interest) subrogation may occur only with the prior authorization of the competent authorities, in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party where the investment was made.

*Article 9***ARBITRATION**

1. Disputes concerning the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled through the diplomatic channel.

2. If the two Contracting Parties cannot reach an agreement within nine months, the dispute shall, upon the request of either Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal consisting of three members. Each Contracting Party shall appoint an arbitrator, and these two arbitrators shall nominate a Chairman who shall be a national of a third State.

3. If either Contracting Party has not appointed its arbitrator, and if, after being invited by the other Party to do so, it has not made the appointment within two months, the arbitrator shall be appointed upon the request of that Contracting Party by the President of the International Court of Justice at The Hague.

4. If the two arbitrators cannot agree as to the choice of Chairman within two months of their appointment, the latter shall be appointed at the request of either Contracting Party by the President of the International Court of Justice at The Hague.

5. If, in the cases referred to in paragraphs 3 and 4 of this article, the President of the International Court of Justice at The Hague does not carry out his function or if he is a national of either Contracting Party, the appointments shall be made by the Vice-President and, if the latter does not carry out his function or if he is a national of either Contracting Party, they shall be made by the next senior Judge of the Court who is not a national of either Contracting Party.

6. Unless the Contracting Parties decide otherwise, the tribunal shall determine its own procedure.

7. The decisions of the tribunal shall be final and binding on each Contracting Party.

Article 10

ENTRY INTO FORCE, RENEWAL AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force on the day on which both Governments have notified each other that the respective constitutional requirements for the entry into force of international agreements have been completed. It shall remain valid for an initial period of 10 years and shall be automatically renewed for consecutive two-year periods.

Either Contracting Party may terminate this Agreement by notifying [the other], in writing, six months before the date of expiration.

2. In case of termination, the provisions of articles 1 to 2 above shall continue to apply for a period of 10 years to investments made before termination.

DONE in Madrid, on 24 April 1990, in two originals in Spanish, both texts being equally authentic.

For the Kingdom
of Spain:

[*Signed*]

LUIS YAÑEZ-BARNUEVO
Secretary of State for International
Cooperation and Ibero-America

For the Republic
of Bolivia:

[*Signed*]

CARLOS ITURRALDE
Minister for Foreign Affairs
and Worship

[TRADUCTION — TRANSLATION]

ACCORD¹ ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Royaume d'Espagne et la République de Bolivie,

Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats,

Reconnaissant la contribution importante qu'apportent les investissements de capitaux privés étrangers au développement économique et le droit qui revient à chaque Partie contractante de déterminer cette contribution et de définir les conditions de la participation des investissements étrangers à ce développement,

Reconnaissant que le seul moyen d'imprimer et d'entretenir un mouvement international adéquat de capitaux consiste à créer de part et d'autre un climat d'investissement satisfaisant et, en ce qui concerne les investissements étrangers, à respecter la souveraineté et les lois du pays hôte ayant juridiction sur ces investissements, à agir en conformité des politiques et des priorités adoptées par le pays hôte, et de s'efforcer de contribuer à son développement,

Désireux de créer des conditions favorables à l'investissement de capitaux dans les deux Etats et d'intensifier la coopération entre leurs investisseurs, notamment dans les domaines de la technologie, de l'industrialisation et de la productivité,

Reconnaissant la nécessité de protéger les investissements des investisseurs des deux Etats et de stimuler les transferts de capitaux en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

DÉFINITIONS

Aux fins du présent Accord, les *investisseurs* sont :

a) En ce qui concerne le Royaume d'Espagne, les personnes physiques résidant en Espagne et les personnes morales qui ont leur domicile social en Espagne et qui ont été constituées conformément aux lois espagnoles;

b) En ce qui concerne la République de Bolivie, toute personne physique de nationalité bolivienne en vertu de la législation en vigueur en République de Bolivie, ainsi que toute personne morale, société de personnes, autre association ou autre entité dont les statuts dérivent de cette législation.

Le terme « investissements » s'entend de l'acquisition de biens ou avoirs de toute nature, et en particulier mais non exclusivement :

a) De la propriété de biens meubles et immeubles ainsi que de tous autres droits réels tels qu'hypothèques, cautionnements, usufruits et droits similaires;

¹ Entré en vigueur le 12 mai 1992, date à laquelle les Parties s'étaient notifié l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, conformément au paragraphe 1 de l'article 10.

- b) Des actions et autres formes de participations dans des sociétés;
- c) Des actifs monétaires et des droits à toute prestation assortie d'une valeur économique, en particulier des titres publics et privés à revenu fixe ainsi que de toutes les catégories de prêts commerciaux et financiers, capitalisés ou non;
- d) Des droits d'auteur et droits de propriété industrielle (par exemple brevets, marques ou noms commerciaux);
- e) Des concessions ou autres droits accordés par les autorités des Parties contractantes, y compris les concessions relatives à la prospection, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.

Le terme « revenus » s'entend des bénéfices nets ou intérêts liés à un investissement durant une période donnée.

Article 2

ENCOURAGEMENT ET ADMISSION

Chacune des Parties contractantes encouragera, dans la mesure du possible, les investissements, sur son territoire, d'investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra lesdits investissements conformément à ses lois, autres dispositions et règlements.

Le présent Accord s'appliquera également aux investissements de capitaux effectués avant l'entrée en vigueur dudit Accord par des ressortissants ou des sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante conformément aux dispositions légales de cette autre Partie contractante.

Article 3

PROTECTION

Chaque Partie contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à sa législation par des investisseurs de l'autre Partie contractante et n'entravera pas, par des mesures indues ou discriminatoires, la gestion, l'entretien et l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la cession et, le cas échéant, la liquidation de ces investissements.

Chaque Partie contractante s'efforcera de délivrer les autorisations nécessaires en relation avec ces investissements et permettra, dans le cadre de sa législation, l'exécution de contrats de licence et d'assistance technique, commerciale ou administrative.

Chaque Partie contractante s'efforcera également, chaque fois que cela sera nécessaire, de délivrer les autorisations voulues en relation avec les activités de consultants ou d'experts engagés sous contrat par des investisseurs de l'autre Partie contractante.

Article 4

TRAITEMENT

1) Chaque Partie contractante assurera, sur son territoire, un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante.

2) Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie contractante aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs, ni que celui accordé par chaque Partie contractante aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est le plus favorable.

3) Ce traitement ne s'appliquera cependant pas aux priviléges accordés par une Partie contractante aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une union douanière, un marché commun ou une zone de libre échange.

4) Les investisseurs d'aucune Partie contractante ne pourront se prévaloir du traitement prévu au paragraphe 2 du présent article dans le dessein de bénéficier de mesures d'incitation (facilités de crédit, subventions, primes d'équipement, garanties ou assurances) accordées par le Gouvernement de l'autre Partie à ses propres ressortissants en matière de politique de développement national.

Article 5

TRANSFERTS

Chaque Partie contractante sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie contractante auront effectué des investissements autorisera ces investisseurs à transférer en devises convertibles, sans retards injustifiés, les paiements liés à leurs investissements, et en particulier :

- a) Les intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
- b) Les redevances ou autres paiements découlant de contrats concernant des droits de licence et d'assistance commerciale, administrative ou technique;
- c) Les paiements découlant d'autres contrats, y compris les amortissements ou remboursements de prêts financiers ou commerciaux;
- d) Les produits de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investissement, y compris les éventuelles plus-values;
- e) Les indemnisations accordées au titre d'une expropriation, d'une nationalisation ou d'autres mesures de même effet ou de même nature.

Les transferts visés ci-dessus s'entendent exonérés d'impôts et seront effectués en devises convertibles. La délivrance des autorisations administratives nécessaires pour l'exécution du transfert devra se faire dans un délai de trois mois à compter de la date de la présentation en bonne et due forme de la demande de transfert.

Article 6

NATIONALISATION ET EXPROPRIATION

Les mesures de nationalisation ou d'expropriation, de même que toutes autres mesures de même nature, qui pourraient être prises par les autorités de l'une des Parties contractantes à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie contractante, devront être conformes aux prescriptions légales et ne devront avoir aucun caractère discriminatoire, ni être motivées par des raisons autres que d'utilité publique. La Partie contractante qui aura pris ces mesures accordera à l'intéressé, sans retards injustifiés, une indemnité adéquate et effective.

*Article 7***CONDITIONS PLUS FAVORABLES**

Les conditions plus favorables que celles du présent Accord qui auront été convenues entre l'une des Parties contractantes et les investisseurs de l'autre Partie contractante ne seront pas affectées par les dispositions du présent Accord.

*Article 8***PRINCIPE DE SUBROGATION**

Si l'une des Parties contractantes effectue un paiement à un investisseur en vertu d'une garantie contre les risques non commerciaux sur un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie contractante, celle-ci reconnaîtra la subrogation à la première Partie contractante des droits économiques de l'investisseur indemnisé.

En ce qui concerne les droits réels liés à un investissement (droit de propriété, d'usage ou d'usufruit), la subrogation ne pourra prendre effet qu'avec l'autorisation délivrée par les autorités compétentes conformément aux lois et règlements de la Partie contractante où a été effectué l'investissement.

*Article 9***ARBITRAGE**

1) Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

2) Si les deux Parties contractantes n'arrivent pas à un règlement dans un délai de neuf mois, le différend sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque Partie contractante désignera un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.

3) Si l'une des Parties contractantes n'a pas désigné son arbitre et n'a pas donné suite à la demande, faite par l'autre Partie contractante, de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la demande de la deuxième Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de Justice de La Haye.

4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur l'élection du président dans un délai de deux mois après leur désignation, celui-ci sera nommé, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de Justice de La Haye.

5) Si, dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice de La Haye est empêché d'exercer son mandat, ou s'il est un ressortissant de l'une des Parties contractantes, les nominations seront faites par le Vice-Président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties contractantes.

6) A moins que les Parties contractantes n'en disposent autrement, le tribunal arrêtera lui-même sa procédure.

7) Les décisions du tribunal seront définitives et auront force obligatoire pour les Parties contractantes.

Article 10

ENTRÉE EN VIGUEUR, RECONDUCTION, DÉNONCIATION

1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront mutuellement signifiés l'accomplissement des formalités institutionnelles requises pour l'entrée en vigueur des accords internationaux. Il restera en vigueur initialement pour une durée de dix ans, puis, par tacite reconduction, pour des périodes consécutives de deux ans.

Chacune des Parties contractantes pourra dénoncer le présent Accord moyennant préavis écrit donné six mois avant la date de son expiration.

2) En cas de dénonciation, les dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus continueront de s'appliquer durant dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.

FAIT à Madrid le 24 avril 1990 en deux exemplaires originaux en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume
d'Espagne :

[*Signé*]

LUIS YÁÑEZ-BARNUEVO
Secrétaire d'Etat pour la coopération
internationale
et pour l'Ibéro-Amérique

Pour la République
de Bolivie :

[*Signé*]

CARLOS ITURRALDE
Ministre des Relations extérieures
et des cultes